



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/HRC/WG.6/5/VNM/3
23 de febrero de 2009

ESPAÑOL
Original: FRANCÉS/INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
Quinto período de sesiones
Ginebra, 4 a 15 de mayo de 2009

**RESUMEN PREPARADO POR LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO
PARA LOS DERECHOS HUMANOS CON ARREGLO AL PÁRRAFO 15 c)
DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN 5/1 DEL CONSEJO
DE DERECHOS HUMANOS***

Viet Nam

El presente informe constituye un resumen de las comunicaciones¹ presentadas por 12 interlocutores para el examen periódico universal. Se ha preparado conforme a las directrices generales adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos. No contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. La falta de información o de atención dedicada a determinadas cuestiones puede deberse a que los interlocutores no se han referido a ellas en sus comunicaciones. Los textos completos de todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. El informe se ha preparado teniendo en cuenta que la periodicidad del examen en el primer ciclo es cuatrienal.

* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

I. ANTECEDENTES Y MARCO

A. Alcance de las obligaciones internacionales

1. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Viet Nam Committee on Human Rights (VCHR) pidieron al Gobierno que garantizara que la Constitución de Viet Nam se armonice con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se asegurara de que la legislación vietnamita garantice la protección efectiva de todos los derechos del Pacto de conformidad con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos².

B. Marco constitucional y legislativo

2. La FIDH y el VCHR señalaron que la protección de los derechos humanos está garantizada por la Constitución de 1992 y por otras disposiciones legislativas. No obstante, el ejercicio de esos derechos se ve gravemente restringido, incluso impedido, por numerosas leyes internas que, al aplicarse en cumplimiento de "las políticas e intereses del Estado"³, afectan a los derechos humanos.

3. Amnistía Internacional (AI) señaló que el artículo 69 de la Constitución de 1992 consagra el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, pero sólo "de conformidad con lo dispuesto en las leyes". Dichas leyes incluyen, entre otras disposiciones, los decretos sobre Internet, la Ley de prensa (enmendada en 1999), la Ley de publicaciones, la Ordenanza sobre la protección de los secretos de Estado y el Código Penal de 1999. Además, disposiciones importantes de esas leyes violan explícitamente tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Viet Nam⁴.

II. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL TERRENO

A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos

4. La FIDH y el VCHR señalaron que el informe periódico de Viet Nam sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debía haber presentado en 1995. Viet Nam tampoco coopera con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas. En efecto, desde 2002, luego de denuncias reiteradas de violaciones de los derechos humanos, cinco titulares de mandatos de procedimientos especiales han solicitado en vano visitar Viet Nam. Desde 1998, cuando el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias expresó su preocupación por los abusos contra la libertad de religión, Viet Nam no ha permitido visita alguna. En aquella ocasión Viet Nam anunció que nunca más "aceptaría que ningún individuo u organización viniera a investigar sobre la libertad de religión o los derechos humanos"⁵.

5. La FIDH y el VCHR pidieron al Gobierno que aplicara las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en particular en relación con la Ley de la tierra, adoptando las medidas necesarias para eliminar las trabas administrativas que impiden la expedición de certificados de uso conjunto de la tierra al esposo y la esposa⁶.

6. Human Rights Watch (HRW) observó que Viet Nam no había revisado ni derogado las leyes sobre la seguridad nacional que penalizaban la expresión pacífica de opiniones políticas y las actividades religiosas independientes, pese a las peticiones que le han dirigido al respecto el Comité de Derechos Humanos (2002), el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria (1995) y el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias (1998)⁷.

B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

1. Igualdad y no discriminación

7. La FIDH y el VCHR afirmaron que en Viet Nam seguían existiendo violaciones graves de los derechos de la mujer, pese a los compromisos adquiridos por el Gobierno de promover la igualdad de género. Entre los abusos se incluían la violencia doméstica, violaciones de los derechos reproductivos, prostitución y trata de mujeres y jóvenes, a menudo con la connivencia de funcionarios del partido y de la policía⁸.

8. La FIDH y el VCHR observaron que, por falta de ejercicio y conocimiento de dichos derechos, el abuso de poder y la corrupción de las autoridades daban lugar a numerosos abusos contra la mujer en relación con su derecho a la tierra. Explicaron que, a pesar de las revisiones de la Ley de la tierra, en virtud de la cual las mujeres tenían derecho a obtener certificados de registro de usuario de la tierra al igual que sus esposos, sólo el 3% de la tierra estaba registrada a nombre de mujeres y el 3% a nombre de ambos. De esa manera, las mujeres que llevaban trabajando décadas en la tierra de sus esposos quedaban al enviudar completamente desposeídas⁹.

2. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona

9. AI señaló que 29 delitos contemplados en el Código Penal, entre ellos los delitos económicos y los delitos contra la seguridad nacional, podían ser castigados con la pena de muerte. La mayor parte de las penas de muerte se imponen por delitos relacionados con el tráfico de drogas¹⁰. En julio de 2008 AI señaló además que el Ministerio de Salud Pública había recomendado que se aboliera la pena de muerte para 12 delitos: la apropiación fraudulenta de bienes; el contrabando; la fabricación y el comercio de alimentos y productos médicos adulterados; la participación en la fabricación, el almacenamiento y la circulación de moneda, bonos y cheques falsos; la organización del consumo ilegal de drogas; el secuestro de aeronaves o buques; la corrupción; el soborno activo o pasivo; la destrucción de armas o equipo técnico del ejército; la participación en una invasión; los delitos "antihumanos" y los crímenes de guerra. Según el informe de un medio de comunicación oficial, se había propuesto la enmienda del artículo 35 del Código Penal, que establece la pena de muerte para determinados delitos, de forma que sólo se aplique a los "delitos más atroces y a las personas que constituyan un grave peligro para la comunidad y la seguridad de la nación"¹¹.

10. Según AI, en enero de 2004 un decreto gubernamental prohibió la difusión de estadísticas relativas a la pena de muerte y a las ejecuciones, cuestiones que se consideran "secreto de Estado" y, en consecuencia, las cifras totales a este respecto no se hacen públicos. AI señaló que esa falta de transparencia contravenía los llamamientos reiterados de las Naciones Unidas a que sólo se recurra a la pena de muerte de manera abierta y transparente y a que se haga pública toda la información sobre su aplicación¹².

11. AI instó al Gobierno a que: impusiera de inmediato una moratoria sobre las ejecuciones, con miras a la abolición de la pena de muerte, de conformidad con la resolución 62/149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; redujera el número de delitos castigados con la pena de muerte, como había propuesto el Gobierno en julio de 2008; divulgara toda la información sobre la imposición y la ejecución de la pena de muerte, en particular la información sobre las ejecuciones realizadas; y alentara el debate entre los miembros de la Asamblea Nacional y otras instituciones legislativas competentes sobre la abolición de la pena de muerte para todos los delitos¹³.

12. HRW afirmó que había recopilado pruebas convincentes sobre tortura y malos tratos infligidos a presos políticos y religiosos y sobre aislamiento de prisioneros en celdas de castigo oscuras e insalubres¹⁴.

13. La FIDH y el VCHR afirmaron que las condiciones de detención eran sumamente duras y que las palizas y la tortura eran habituales. Los presos, incluidos los enfermos y los ancianos, eran obligados a realizar trabajos penosos. Las prisiones se caracterizaban por el hacinamiento y la suciedad, las raciones alimenticias eran claramente insuficientes, y sólo recibían atención médica quienes podían costearla¹⁵.

14. La FIDH y el VCHR señalaron que la Ordenanza N° 44 por la que se rige el tratamiento de las violaciones administrativas autoriza a los funcionarios locales no sólo a arrestar y detener a los ciudadanos sino también a confinarlos en hospitales mentales o "campos de rehabilitación", sin ninguna de las garantías judiciales debidas. Precisaron que la Ordenanza se utilizaba en particular contra los disidentes políticos y religiosos y legalizaba la práctica arbitraria del encarcelamiento sin juicio¹⁶. HRW recomendó a Viet Nam que derogara la Ordenanza N° 44, que autoriza la detención administrativa, el arresto domiciliario o la detención de individuos en Centros de Protección Social (*Trung Tam Bao Tro Xa Hoi* en vietnamita) y en establecimientos psiquiátricos durante períodos de dos años renovables, sin juicio, cuando se considere que dichos individuos han violado las leyes de la seguridad nacional¹⁷.

15. HRW señaló que la policía estaba autorizada para arrestar a personas y recluirlas en Centros de Protección Social si a su juicio dichas personas, entre las que figuraban los niños de la calle, los trabajadores del sexo, las víctimas de la trata y los vendedores ambulantes, constituían un peligro social. Esos detenidos son además sometidos a sevicias y malos tratos. Por ejemplo, en 2006 Human Rights Watch documentó los malos tratos infligidos a niños de la calle detenidos arbitrariamente en el Centro de Protección Social Dong Dau cerca de Hanoi, que incluían en particular castigos corporales, castigos colectivos, incomunicación, privación de alimentos y tratamiento médico y denegación del contacto con los familiares¹⁸.

16. La FIDH y el VCHR observaron que, en virtud del artículo 120 del Código de Procedimiento Penal enmendado en 2004, los presuntos infractores de la "seguridad nacional" podían ser mantenidos en custodia policial hasta cuatro meses mientras se realizaba la investigación. Luego de ese período, que podía prorrogarse hasta cuatro veces por decisión del Presidente de la Fiscalía Popular Suprema, las autoridades podían poner en libertad al detenido o, "en caso necesario, aplicar otras medidas disuasorias". La FIDH y el VCHR afirmaron que la "libertad vigilada" o *Quan che* (artículo 30 del Código Penal), constituía un castigo adicional infligido a los ex presos políticos. Precisaron que en virtud de ese artículo, el Estado podía someter a los autores de delitos contra la "seguridad nacional" a la supervisión y reeducación de la autoridad local durante un período de prueba de uno a cinco años a partir de su puesta en libertad. Durante ese tiempo, se les prohíbe salir de casa, se les priva de sus derechos civiles y están sometidos a la vigilancia constante de la policía. Añadieron que en teoría la *Quan che* sólo podía aplicarse por decisión de un tribunal, pero en la práctica se aplicaba automáticamente y durante muchos años a los presos políticos y religiosos, después de su puesta en libertad¹⁹.

17. La Iniciativa Global para Acabar con todo Castigo Corporal hacia niños y niñas (GIEACPC) observó que en Viet Nam era lícito el castigo corporal de los niños. Señaló que si bien varias leyes protegían la dignidad, el honor y la integridad de los niños, entre ellas la Ley de protección, cuidado y educación de los niños, no había ningún indicio de que la interpretación de que eran objeto dichas leyes prohibiera todas las formas de castigo corporal infligido por los padres a sus hijos en nombre de la "disciplina". Añadió que en las escuelas las leyes protegían el honor y la dignidad de los niños

y prohibían atentar contra su integridad física, pero no había ninguna declaración tajante de que ello implicara la prohibición de los castigos corporales y, por consiguiente, éstos se seguían utilizando. La GIEACPC se refirió además a una investigación realizada en 2005 relativa a las experiencias de 500 niños y 300 adultos, en la que se determinó que el 94% de los niños había sido objeto de castigos físicos y emocionales en el hogar y el 93% de ellos en la escuela, y que, en el 82% de los casos, los castigos habían sido infligidos en todo el cuerpo. La mayor parte de los niños afirmó que los palmetazos, muy comunes en la escuela y en el hogar, eran el peor castigo. Otros castigos eran los palmetazos al niño colgado de un árbol, las descargas eléctricas, las fracturas de miembros y las quemaduras con cigarrillos. Según el sistema penal, es ilícito imponer un castigo corporal como pena por un delito o como medida disciplinaria en las instituciones penales. El castigo corporal está permitido en las instituciones de cuidados alternativos²⁰.

3. Administración de justicia, incluida la impunidad, y estado de derecho

18. La Federación Internacional de PEN Clubs señaló la existencia de los denominados "tribunales populares", constituidos por personas reunidas por agentes del Gobierno para celebrar simulacros de juicios de disidentes. Los individuos que comparecían ante esos tribunales eran inculcados, humillados y finalmente "condenados", sin el más mínimo respeto por los principios del juicio imparcial²¹. La Federación Internacional de PEN Clubs pidió a las autoridades vietnamitas que cesen las prácticas utilizadas en los "tribunales populares", que no respetaban las normas internacionales del juicio imparcial establecidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y las instó a que, en espera de la puesta en libertad de todos los presos de conciencia, mejoren las condiciones en las cárceles y campos de detención y proporcionen tratamiento médico adecuado a todo el que lo necesite²².

19. HRW recomendó a Viet Nam que atendiera todas las reclamaciones de la población rural relativas a los derechos de la tierra y la corrupción local, sin recurrir al uso excesivo de la fuerza ni a otras violaciones de los derechos humanos, fortaleciendo el sistema judicial y la independencia de los jueces y poniendo servicios jurídicos a disposición de la población rural pobre²³.

4. Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política

20. El European Centre for Law and Justice (ECLJ) señaló que la libertad de religión había mejorado de manera notoria, pero que la religión mayoritaria seguía beneficiándose de un trato preferencial, mientras que las religiones minoritarias y no autorizadas, en particular el cristianismo, seguían recibiendo un trato que presentaba rasgos de hostilidad. Añadió que los cristianos eran vigilados estrechamente y que, si pertenecían a un grupo étnico determinado, eran víctimas de la discriminación e incluso de la violencia²⁴.

21. El Institute on Religion and Public Policy (IRPP) afirmó que prácticamente todos los grupos religiosos del país, desde los budistas hasta los católicos, pasando por los protestantes, habían sido discriminados y perseguidos. Dicha persecución era exacerbada por el hecho de que muchas de esas comunidades religiosas existían dentro de minorías étnicas de Viet Nam ya de por sí consideradas sospechosas por el Gobierno²⁵.

22. El IRPP tomó nota de que la Constitución de 1992 establecía la libertad de religión y de creencias (art. 70), pero observó que contenía cláusulas que podían socavar la libertad de religión. En efecto, el artículo 30 de la Constitución dispone que "el Estado se encargará de la administración general de las actividades culturales. Está prohibida la divulgación de todo pensamiento y cultura reaccionarios y depravados, y se deberán erradicar todas las supersticiones y las costumbres

perniciosas". Esta cláusula ofrece al Gobierno un vacío administrativo que permite a las autoridades vietnamitas calificar determinadas formas de expresión religiosa de "cultura depravada", "supersticiones" o "costumbres perniciosas". El artículo otorga al Gobierno el poder constitucional de discriminar contra dogmas o grupos religiosos, sin necesidad de aplicar ningún criterio objetivo concreto²⁶. La Federación Internacional de PEN Clubs expresó inquietudes similares²⁷.

23. Christian Solidarity Worldwide (CSW) se refirió a dos documentos normativos: la Ordenanza relativa a las creencias religiosas y las organizaciones religiosas, que entró en vigor el 15 de noviembre de 2004, y el Decreto sobre la religión, que se promulgó el 1º de marzo de 2005 para establecer las directrices de la aplicación de la Ordenanza, en particular el complejo y mal definido procedimiento de inscripción y reconocimiento de las confesiones y congregaciones. CSW observó que, si bien la Ordenanza garantizaba el derecho de libertad de religión y creencias religiosas, establecía para la práctica de la religión una serie de reservas mal definidas que superan con mucho las limitaciones establecidas en los instrumentos internacionales de protección de la libertad de religión. Cabe citar entre ellas el artículo 8 2), que prohíbe el "abuso" de la religión para socavar la unidad nacional, "sembrar la división entre la población, los grupos étnicos y las religiones" o "difundir prácticas supersticiosas", y el artículo 15, que establece que las actividades religiosas serán suspendidas si "afectan negativamente a la unidad de la población o a la fina tradición cultural de la nación"²⁸.

24. CSW señaló además que seguía existiendo una intolerancia particular a la propagación de la fe cristiana, y que los nuevos cristianos se veían sometidos a restricciones particulares. Se conocían casos de desalojos forzados y de restricciones a la libertad de circulación y al acceso a la formación teológica. CSW señaló que si bien el empleo de la tortura contra miembros de grupos religiosos había disminuido en general, no había desaparecido por completo²⁹.

25. En cuanto a las inscripciones en el registro de las congregaciones protestantes, CSW señaló que la tasa de inscripciones había venido disminuyendo hasta paralizarse, con lo que las que no se habían inscrito habían quedado en una situación jurídica incierta que las hacía vulnerables al acoso y a la amenaza de un posible cierre. Las congregaciones de afiliación incierta eran las que encontraban más problemas de inscripción, aunque las nuevas iglesias y las congregaciones de minorías étnicas podían también tropezar con dificultades particulares. En algunas zonas las autoridades solían pedir una lista de los miembros de la congregación³⁰.

26. CSW afirmó que el Gobierno y los dirigentes locales del partido trataban siempre con desconfianza al protestantismo, lo que daba lugar a varias formas de represión y discriminación. Se reconocía en general que había disminuido la tendencia a forzar a las personas a renunciar a su religión, aunque había indicios de que esta práctica no había sido abandonada de manera uniforme, en particular en los altiplanos septentrionales y centrales. No obstante, los protestantes en todo Viet Nam enfrentaban otra amenaza más persistente, la de la interrupción de su acceso a la financiación y las prestaciones del Gobierno y de las organizaciones no gubernamentales, que se tramitaban por conducto de las autoridades locales³¹. Según CSW, los derechos jurídicos de la minoría protestante del norte de Viet Nam se habían visto perjudicados por la negativa de las autoridades competentes a expedirles documentos de identidad en los que se reconociera su afiliación religiosa. Sin el debido reconocimiento de su condición de protestantes, quedaban en una situación indefinida y vulnerable, pues o bien carecían de documento de identidad o bien el hecho de que figuraran en dicho documento como no afiliados a ninguna religión podía utilizarse para impedirles su asistencia a la iglesia³².

27. CSW señaló que, en el contexto del altiplano central, seguía habiendo pruebas de que los funcionarios del Gobierno continuaban asociando al protestantismo con el movimiento político Degar, con lo que persistía su desconfianza por razones políticas en la actividad de los protestantes. CSW precisó que si bien existía y había existido históricamente algún grado de imbricación entre los protestantes y el movimiento Degar y sus predecesores, la asistencia de algunos protestantes a las manifestaciones de protesta de 2001 fue interpretada por las autoridades en algunos contextos como indicio de que todos los protestantes comulgaban con las ambiciones políticas del movimiento Degar³³.

28. La FIDH y el VCHR señalaron que la situación de la Iglesia Budista Unificada de Viet Nam, a la que estaba afiliada la mayor parte de la población del país, era particularmente preocupante. Prohibida efectivamente en 1981 tras la creación de la Iglesia Budista de Viet Nam, patrocinada por el Estado, sus dirigentes y miembros son objeto de detención, intimidaciones y acosos constantes. Pese a los reiterados llamamientos de la comunidad internacional, Viet Nam no ha restablecido su condición legal³⁴. La FIDH y el VCHR observaron además que en 2007 las autoridades detuvieron a 20 monjes budistas de la comunidad jemer krom por participar en una manifestación pacífica en favor de la libertad religiosa. Cinco de ellos fueron condenados a penas de prisión. Por otra parte, se ha utilizado fuerza excesiva contra los agricultores de la comunidad jemer krom que pedían la resolución de conflictos por la tierra³⁵.

29. AI señaló que en septiembre de 2008 la policía había disuelto por la fuerza las manifestaciones pacíficas multitudinarias de Hanoi. Desde diciembre de 2007, los miembros de la Iglesia Católica han participado en manifestaciones pacíficas multitudinarias y vigilias de oración para apoyar las reclamaciones de la iglesia en relación con la propiedad de dos terrenos³⁶. AI señaló además que las autoridades seguían amenazando e intimidando de otras maneras a los católicos que apoyaban las reclamaciones de la iglesia³⁷.

30. CSW expresó su preocupación por los informes según los cuales desde 2007 en algunas provincias septentrionales se había prohibido a los menores asistir al culto de las iglesias hogareñas, y se había advertido que en caso de infracción de la prohibición se retiraría a la iglesia los documentos de registro. CSW agregó que el año anterior se habían recibido informes similares³⁸.

31. CSW señaló además que en la provincia de Dien Bien miembros del movimiento *Chau Pha* habían tratado activamente de reclutar a protestantes hmong, prometiéndoles plena libertad religiosa. Los protestantes hmong de la región corren el riesgo de quedar atrapados entre la violenta hostilidad de los activistas del *Chau Pha* y la sospecha del Gobierno de que son simpatizantes de dicho movimiento³⁹.

32. La Federación Internacional de PEN Clubs afirmó que había observado en una campaña la tendencia a silenciar la disidencia en la prensa y en Internet y a eliminar el disenso pacífico y la oposición política. Añadió que los tribunales vietnamitas imponían penas de prisión severas, que en algunos casos debían cumplirse en campos de trabajos forzados, y después de su cumplimiento los individuos eran colocados en régimen de arresto domiciliario, en el que se mantenía la restricción de sus derechos⁴⁰.

33. La Federación Internacional de PEN Clubs señaló asimismo que muchos escritores, periodistas y disidentes actualmente presos en Viet Nam habían sido encarcelados por expresar su opinión o disentir públicamente, o por colaborar en publicaciones clandestinas o por Internet. Quienes han decidido ejercer su derecho a la libertad de expresión y no han sido aún encarcelados suelen ser objeto de interrogatorios frecuentes y arresto domiciliario⁴¹. Preocupaciones similares han sido expresadas por la Association Tourner la PAGE⁴². La Federación Internacional de PEN

Clubs observó que, según se ha informado, el proceso para obtener la autorización de publicaciones en Viet Nam era sumamente complejo y que cada obra debía pasar por un mecanismo sistemático de examen y registro antes de su inscripción. Debido a ello, algunos escritores y editores se han visto obligados a utilizar medios clandestinos para imprimir su material y distribuirlo entre la población⁴³.

34. AI señaló que los medios de comunicación en Viet Nam seguían siendo sometidos a controles estrictos y que la libertad de prensa estaba muy restringida. Agregó que en los últimos años, como resultado de un creciente interés del público por los escándalos de corrupción, los medios de comunicación habían dado mayor publicidad a casos importantes⁴⁴.

35. La FIDH y el VCHR afirmaron que Viet Nam reprimía sistemáticamente las manifestaciones y aplicaba a los manifestantes la legislación penal. Señalaron que las manifestaciones pacíficas de agricultores y campesinos, conocidos como las "víctimas de la injusticia", muchas de las cuales son mujeres, también habían sido brutalmente reprimidas. Ese movimiento de protesta rural, en el que campesinos desposeídos organizan marcha a Hanoi o Saigón para presentar allí sus peticiones y acampan frente a los edificios gubernamentales para expresar sus protestas por las confiscaciones estatales de sus tierras para proyectos de desarrollo sin otorgarles la indemnización debida, ha adquirido proporciones enormes, y en los últimos diez años se han presentado más de 2 millones de reclamaciones⁴⁵.

36. AI afirmó que las autoridades solían aplicar las disposiciones del Código Penal para coartar la libertad de expresión, en particular la crítica de las políticas gubernamentales y las referencias a las cuestiones consideradas políticamente delicadas⁴⁶. AI afirmó además que las autoridades seguían procurando controlar y restringir la utilización de los portales de Internet que consideraban indeseables. Entre las numerosas personas detenidas en la operación de represión figuraban abogados, sindicalistas, dirigentes religiosos y activistas políticos que estaban libremente conectados entre sí a través del Bloc 8406, movimiento por Internet en favor de la democracia fundado el 8 de abril de 2006, y con grupos políticos no autorizados que promovían la democracia y los derechos humanos. AI añadió que entre los cargos formulados contra los disidentes se solían incluir referencias al envío y publicación de información en sitios web con el fin de "calumniar" al Gobierno y "distorsionar" las políticas gubernamentales⁴⁷.

37. AI instó al Gobierno a que: derogara o enmendara determinadas disposiciones del Código Penal de 1999 a fin de eliminar las disposiciones ambiguas relativas a la seguridad nacional o de definir las claramente de manera que no se puedan aplicar de forma arbitraria para coartar la disensión, el debate y la oposición legítimas ni la libertad de expresión; derogara las disposiciones del Código Penal de 1999 que permiten recurrir al arresto domiciliario o la libertad vigilada como formas de violar la libertad de expresión y de reunión; eliminara todas las restricciones e interferencias arbitrarias en el funcionamiento y el uso de Internet que violan el derecho a la libertad de expresión, y pusiera fin a prácticas como la censura y la vigilancia⁴⁸.

38. AI pidió además al Gobierno que: pusiera fin a las restricciones al derecho a practicar la religión de elección de cada cual, de conformidad con los artículos 69 y 70 de la Constitución y con las normas internacionales de derechos humanos; se asegurara de que las autoridades competentes son conscientes de su deber de proteger el derecho de las personas a la libertad de religión; adoptara medidas para garantizar la protección del derecho a la expresión pacífica de las creencias políticas; adoptara las medidas necesarias para poner fin a las restricciones al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica; velara por que los agentes de policía sean conscientes de su deber de proteger los derechos humanos de todos los individuos; pusiera en libertad de inmediato y sin

condiciones a todos los presos de conciencia; e invitara al Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias a visitar Viet Nam⁴⁹.

5. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

39. La FIDH y el VCHR observaron que el Gobierno había adoptado un decreto nuevo por el que los trabajadores que se declararan en huelga quedaban obligados a pagar a su empleador tres meses de salario por concepto de indemnización si la huelga se consideraba ilegal. A pesar de que el Código de Trabajo de 1995 consagra el derecho de huelga, las huelgas están prohibidas en 54 sectores considerados de "interés público" o importantes para la economía o la defensa de la nación (entre ellos la administración postal, el transporte público y la banca). El Primer Ministro puede "terminar" cualquier huelga que se perciba como "perjudicial para la economía nacional o la seguridad pública". El Código de Trabajo no autoriza la libertad de asociación. Todos los sindicatos están integrados en la Confederación General del Trabajo de Viet Nam, controlada por el Partido Comunista de Viet Nam, y están prohibidos los sindicatos libres. En 2007 varias personas que habían fundado un sindicato no oficial, la Organización de Trabajadores y Agricultores Unidos, fueron detenidas y condenadas a penas de prisión severas por el mero hecho de tratar de proteger los derechos de los trabajadores y exigir el derecho a constituir sindicatos libres⁵⁰. La FIDH y el VCHR pidieron al Gobierno que garantizara el derecho a la libertad de reunión y la libertad de asociación y que permitiera el establecimiento de sindicatos no dependientes del Partido Comunista de Viet Nam⁵¹.

40. HRW recomendó a Viet Nam que, de manera inmediata y sin condiciones, pusiera en libertad a todas las personas detenidas por realizar actividades pacíficas de promoción de los derechos de los trabajadores a asociarse libremente, en particular el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos, a reunirse pacíficamente para proteger y promover sus derechos, y a ejercer su derecho a la libertad de expresión en nombre de los trabajadores y sus preocupaciones, y que reconociera a los sindicatos independientes⁵².

6. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado

41. La Khmers Kampuchea-Krom Federation (KKF) señaló que aproximadamente 3.000 jemeress krom habían sido afectadas, en uno o ambos ojos, por una epidemia en el distrito de Vinh Chau, provincia de Khleang (rebautizada Soc Trang). Se ha informado de casos de ceguera en toda la provincia de Khleang, en particular en los distritos de My Tu y My Xuyen, y en la provincia de Preah Trapeang (Tra Vinh). Se requiere atención médica inmediata para las personas afectadas por la epidemia, así como una investigación exhaustiva a fin de determinar la causa de la enfermedad y prevenir nuevos brotes. Pese a la atención de los medios de difusión y a que en 2005 la KKF había señalado la cuestión a la atención del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Gobierno no ha hecho nada por investigar ni resolver este problema de salud⁵³.

7. Derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad

42. INDIG apoyó la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, especialmente en relación con la formación de los maestros. INDIG señaló que, en los templos tradicionales, los monjes han impartido enseñanzas, en particular a niños jemeress krom en su idioma materno. Debe hacerse más para crear un programa que garantice la educación⁵⁴.

43. La KKF señaló que la enseñanza actual del idioma jemer en las escuelas públicas no permitía en realidad a los niños jemeress krom aprender su idioma materno y que algunas de las escuelas públicas dedicaban sólo dos o tres horas semanales a la enseñanza del idioma jemer.

En Kampuchea Krom el jemer no está reconocido como idioma oficial y no existen libros escritos en jemer. Todos los letreros y las solicitudes, incluidos los formularios y documentos legales, deben estar escritos en jemer y vietnamita. La brecha educativa entre la población mayoritaria (vietnamita) y las minorías, especialmente los jemer krom, es particularmente importante en la educación superior. Las iniciativas del exterior destinadas a apoyar el progreso de los jemer krom se ven obstaculizadas porque el Gobierno las considera vinculadas a motivos políticos⁵⁵.

8. Minorías y pueblos indígenas

44. La Organización de Naciones y Pueblos no Representados instó a las autoridades vietnamitas a que: reconocieran el estatuto de pueblos indígenas a los jemer krom de Kampuchea Krom y a los montañeses (*montagnards*) cristianos; crearan un mecanismo eficaz para la solución de las reclamaciones de tierras pendientes formuladas por ambos pueblos indígenas y los indemnizara por la pérdida de sus tierras ancestrales, de conformidad con el artículo 8 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; y firmaran y ratificaran el Convenio N° 169 de la OIT a fin de que se respetaran las tradiciones de los pueblos indígenas en relación con el uso de sus tierras ancestrales⁵⁶.

45. AI observó que se seguían violando los derechos humanos de la minoría étnica de los montañeses (*montagnards*) cristianos en el altiplano central. Entre esas violaciones cabe citar las restricciones a la libre circulación y la obligación impuesta a los cristianos de las "iglesias hogareñas" de renunciar a su religión. Se cree que permanece en prisión un número desconocido de los más de 250 montañeses condenados a largas penas de prisión por las protestas en gran escala de 2001 y 2004 relacionadas con la propiedad de la tierra y la libertad de religión⁵⁷.

46. La FIDH y el VCHR afirmaron que los montañeses (*montagnards*) del altiplano central y septentrional de Viet Nam eran víctimas de discriminación, en particular por la exclusión social, la confiscación de sus tierras ancestrales, la migración favorecida por el Estado de personas de etnia vietnamita a las zonas del altiplano y la erosión de la cultura tradicional. La persecución religiosa es también un problema importante, debido al cual muchos montañeses (*montagnards*) se han debido convertir al protestantismo⁵⁸.

47. INDIG señaló que el pueblo jemer krom había enfrentado violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos durante las olas de asentamientos de vietnamitas en sus tierras ancestrales de Kampuchea Krom. Durante varios siglos, pero en particular desde junio de 1949, los gobiernos de Viet Nam habían instituido prácticas para discriminar al pueblo jemer krom y limitarles el ejercicio de su derecho a la libre determinación. En cada una de las fases de la ocupación, el pueblo jemer krom había resistido, perpetuado su cultura y su idioma y mantenido su identidad colectiva⁵⁹.

48. La Association Tourner la PAGE señaló que en el caso de los jemer krom, la cuestión religiosa no sólo estaba relacionada con la libertad de culto sino también con la preservación y transmisión del patrimonio cultural. Precisó que en un contexto en que el vietnamita era el idioma vehicular de la enseñanza y el utilizado por la administración, era en los templos budistas donde se enseñaba y practicaba el jemer (los jemer krom practican en su mayoría el budismo *therevada*, a diferencia de la mayoría de los budistas vietnamitas, que practican el budismo *mahayana*). Por consiguiente, concluyó, las restricciones a la práctica del budismo *therevada* tenían repercusiones directas no sólo en la libertad de culto de las poblaciones jemer de Viet Nam sino también en la transmisión del idioma y la cultura jemer⁶⁰.

49. En lo tocante al derecho de los jemer krom a la propiedad, la Organización de Naciones y Pueblos no Representados señaló que Viet Nam no había reconocido a los jemer krom como

pueblo indígena ni tampoco había firmado ni ratificado el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Añadió que las personas del pueblo jemer que deseaban hacer efectivos sus derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos enfrentaban la violencia, la detención arbitraria y, a veces, la tortura⁶¹.

50. La Organización de Naciones y Pueblos no Representados también señaló que los jemer krom sufrían de manera desproporcionada por las faltas de conducta del personal de seguridad y los agentes de policía vietnamitas que los trataban con discriminación. Precisó que las protestas pacíficas habían sido reprimidas en numerosas ocasiones, como, por ejemplo, la que realizaron 80 agricultores el 28 de febrero de 2008 en la provincia de An Giang para solicitar a las autoridades vietnamitas la devolución de sus tierras agrícolas ancestrales⁶².

III. LOGROS, PRÁCTICAS ÓPTIMAS, RETOS Y LIMITACIONES

51. La Organización de Naciones y Pueblos no Representados afirmó que, en términos generales, a pesar de las violaciones generalizadas de los derechos humanos infligidas a los miembros de las minorías jemer krom y *montagnards*, debería encomiarse al Gobierno por haber incluido en su Constitución nacional derechos humanos fundamentales, como la libertad de religión, y por haber ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aunque el ejercicio de esos derechos seguía siendo débil⁶³.

IV. PRINCIPALES PRIORIDADES, INICIATIVAS Y COMPROMISOS NACIONALES

N.A.

V. FOMENTO DE LA CAPACIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA

N.A.

Notas

¹ The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a non-governmental organization in consultative status with the Economic and Social Council.)

Civil society

AI	Amnesty International*, London, United Kingdom
ATLP	Association Tourner la PAGE, Maurepas, France
CSW	Christian Solidarity Worldwide, Surrey, United Kingdom
ECLJ	European Centre for Law and Justice*, Strasbourg, France
FIDH and VCHR	International Federation of Human Rights*, Paris, France and Viet Nam Committee on Human Rights
GIEACPC	Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children
HRW	Human Rights Watch*, New York, United States
INDIG	INDIG, Hawaii, United States
International PEN	International PEN,* London, United Kingdom
IRPP	Institute on Religion and Public Policy, Washington D.C., USA
KKF	Khmers Kampuchea-Krom Federation, NJ, USA
UNPO	Unrepresented Nations and Peoples Organization, The Hague, the Netherlands.

² FIDH and VCHR, p. 5.

³ FIDH and VCHR, p. 1.

⁴ AI, p. 3. See also FIDH and VCHR, p. 1.

⁵ FIDH and VCHR, p. 1.

⁶ FIDH and VCHR, p. 6.

⁷ HRW, p. 1.

⁸ FIDH and VCHR, p. 4.

⁹ FIDH and VCHR, p. 4.

¹⁰ AI, p. 3. See also FIDH and VCHR, p. 3.

¹¹ AI, p. 4.

¹² AI, p. 4.

¹³ AI, p. 7. See also FIDH and VCHR, p. 6.

¹⁴ HRW, p. 2.

¹⁵ FIDH and VCHR, p. 5. See also International PEN, p. 3.

¹⁶ FIDH and VCHR, p. 2.

¹⁷ HRW, p. 4.

¹⁸ HRW, p. 2.

¹⁹ FIDH and VCHR, p. 2.

²⁰ GIEACPC, p. 2.

²¹ International PEN, p. 4.

²² International PEN, p. 4.

²³ HRW, p. 5.

²⁴ ECLJ, p. 1.

²⁵ IRPP, p. 1.

²⁶ IRPP, pp. 1-2.

²⁷ International PEN, p. 3.

²⁸ CSW, p. 2. See also ECLJ, pp. 1-3, FIDH and VCHR, p. 3, and HRW, p. 2.

²⁹ CSW, p. 4. See also AI, pp. 5 - 6.

³⁰ CSW, p. 3.

³¹ CSW, p. 4.

³² CSW, p. 4. See also FIDH and VCHR, p. 4.

³³ CSW, p. 4. See also ECLJ, p. 4.

³⁴ FIDH and VCHR, p. 3. See also IRPP, p. 2., and International PEN, p. 2.

³⁵ FIDH and VCHR, p. 4. See also ATLP, p. 2. IRPP, p. 2., KKF, pp. 1-2 and UNPO, p. 2.

³⁶ AI, p. 5. See also FIDH and VCHR, p. 4., and IRPP, p. 3.

³⁷ AI, p. 5.

³⁸ CSW, p. 5.

³⁹ CSW, p. 5. See also IRPP, p. 4.

⁴⁰ International PEN, p. 1.

⁴¹ International PEN, p. 1.

⁴² ATLP, p. 1.

- ⁴³ International PEN, p. 3.
- ⁴⁴ AI, p. 5. See also FIDH and VCHR, p. 2, and International PEN, p. 2.
- ⁴⁵ FIDH and VCHR, p. 4. See also HRW, p. 3.
- ⁴⁶ AI, p. 4. See also HRW, p. 1.
- ⁴⁷ AI, p. 5. See also FIDH and VCHR, p. 2, HRW, p. 3, and International PEN pp. 2-3.
- ⁴⁸ AI, p. 7. See also FIDH and VCHR, p. 6, and HRW, p. 4.
- ⁴⁹ AI, p. 7. See also HRW, p. 4.
- ⁵⁰ FIDH and VCHR, p. 5. See also HRW, p. 3.
- ⁵¹ FIDH and VCHR, p. 6.
- ⁵² HRW, p. 5.
- ⁵³ KKF, p. 5.
- ⁵⁴ INDIG, p. 3.
- ⁵⁵ KKF, p. 3.
- ⁵⁶ UNPO, p. 5.
- ⁵⁷ AI, p. 6.
- ⁵⁸ FIDH and VCHR, p. 4. See also IRPP, p.p. 3-4, and UNPO, pp. 3-4.
- ⁵⁹ INDIG, p. 1. See also UNPO, p. 1.
- ⁶⁰ ATLP, pp. 2-3.
- ⁶¹ UNPO, p. 2.
- ⁶² UNPO, p. 3.
- ⁶³ UNPO, p. 5.
